SENADO DE PUERTO RICO
R. del S. 860

13 de enero de 2010

Presentada por el *señor Rivera Schatz*

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para urgir a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos Bancarios (“Federal Deposit Insurance Corporation”, conocida por sus siglas en inglés como “FDIC”), a ser mesurados en la aplicación de estándares de valorización de activos contra los bancos de etnia minoritaria establecidos en Puerto Rico; establecer medidas efectivas que faciliten la concesión de crédito; y asistir a los bancos locales en su recuperación económica y capitalización; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante el pasado año, un número significativo de instituciones bancarias alrededor del mundo sufrieron un severo golpe en sus finanzas como resultado de la crisis económica global. Puerto Rico no fue la excepción en este grave y complejo problema financiero. Vemos con mayor frecuencia reportes noticiosos indicándonos tales problemas y gobiernos evaluando propuestas y alternativas financieras para proveer mecanismos que atiendan y frenen las pérdidas sufridas en este sector, así como fortalecer sus economías promoviendo y revitalizando las actividades bancarias. Ciertamente el éxito de la recuperación económica global reside en el fino balance entre las necesidades y reglas de las diversas economías, la aplicabilidad de éstas a sus consumidores y su implantación por los entes reguladores de los gobiernos en cuestión.

Recientemente la prensa de la Isla publicó datos provistos por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos Bancarios (“Federal Deposit Insurance Corporation”, conocida por sus siglas en inglés como “FDIC”), para informar que al 30 de septiembre de 2009 los bancos locales continuaron la tendencia decreciente al reportar una disminución en sus activos totales equivalentes a un 9% y una pérdida neta aproximada reportada a esa fecha de \$147 millones de dólares. Informaron además los esfuerzos de la administración del gobernador Luis Fortuño en

alcanzar acuerdos de financiamiento que le permitan al gobierno de Puerto Rico solicitar la compra de activos de bancos locales a través del Programa de Activos en Problemas (“Troubled Asset Relief Program”, conocida por sus siglas en inglés como “TARP”), para disminuir sus reservas por préstamos morosos y poder conceder nuevos préstamos.

La importancia de la Banca de Puerto Rico en nuestra economía es inequívoca. Los bancos en Puerto Rico proveen en exceso de 15,000 empleos directos y un sinnúmero de empleos indirectos a través del financiamiento de la actividad comercial en Puerto Rico. Más aun, a principios de la década, los bancos eran un importante contribuyente al fisco de Puerto Rico con contribuciones pagadas en exceso de \$200 millones. Ante la difícil situación financiera que atraviesan los bancos, el FDIC ha tomado la postura de establecer exámenes regulatorios rigurosos que se contraponen a la política pública del Presidente Barack Obama y el Gobernador Luis Fortuño de reactivar y viabilizar las economías regionales y nacionales. Específicamente, en momentos que se requiere medida en la valorización de activos, el FDIC, a través de sus examinadores, está sugiriendo supuestos que tendrían un efecto en detrimento al valor de los activos que sirve de colateral a los préstamos de bancos en Puerto Rico. Esto pudiese llevar a incrementos significantes en la reserva de préstamos en las instituciones financieras en Puerto Rico y a la potencial descapitalización de los bancos locales. Por ende, esto provocaría una merma en la actividad prestataria y la actividad económica en Puerto Rico.

Cabe destacar que según datos del FDIC, la mayoría de los bancos de la Isla se encuentran entre los primeros veinte bancos de propietarios de etnia minoritaria más grandes de la Nación. A modo de ejemplo, Banco Popular de Puerto Rico ocupa la primera posición, FirstBank de Puerto Rico ocupa la segunda posición, Westernbank de Puerto Rico ocupa la tercera posición, R-G Premier Bank de Puerto Rico ocupa la octava posición y Eurobank ocupa la decimotercera posición, respectivamente.

Al igual que en Puerto Rico, este asunto se ha manifestado en el ámbito nacional según expresara en fecha reciente el congresista Barney Frank, representante por el 4to distrito congresional de Massachusetts y Presidente del Comité de Finanzas de la Cámara de Representantes Federal, en una carta dirigida a los miembros de la Reserva Federal (“Federal Reserve System”), la Oficina del Contralor de la Moneda (“Office of the Comptroller of the Currency”), la Oficina de Supervisión de las Instituciones de Ahorro del Departamento del

Tesoro (“Office of the Thrift Supervision”), la Corporación Federal de Seguro de Depósitos Bancarios (“Federal Deposit Insurance Corporation”) y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (“National Credit Union Administration”). En dicha carta el congresista Frank hace un llamado a la prudencia en la aplicación de las normas que rigen la banca nacional y solicita a las entidades reguladoras federales a tomar en consideración los principios de seguridad y solidez establecidas en éstas.

Dicho funcionario reconoció además que uno de los retos que la banca nacional enfrenta actualmente es el cumplimiento del reclamo del Congreso Federal a estimular la economía nacional estableciendo medidas que incentiven la otorgación de préstamos y atender los prestatarios que enfrentan procesos de ejecución de hipotecas mientras cumplen a su vez con las normas establecidas por las entidades reguladoras del gobierno federal. Se ha comprobado en diversas instancias, que la interpretación y ejecución de estas normas reguladoras no permite el estímulo anhelado al mercado tras resultar contrarias a la exhortación del Congreso. Tal ha sido el caso cuando representantes de agencias reguladoras han intervenido con bancos locales, como los de Puerto Rico, para requerir el cumplimiento de estándares aún más estrictos en el negocio bancario, lo que no les ha permitido recuperar sus activos con celeridad y eficacia.

Por otro lado, el 30 de octubre de 2009, los reguladores federales emitieron una nueva política sobre la reestructuración de préstamos comerciales. La nueva política establece, entre otras cosas, mesura y prudencia en la toma de decisiones con respecto a la reestructuración de préstamos, el reconocimiento de pérdidas a tiempo y la clasificación de préstamos adecuadamente. La nueva política reitera que la clasificación de un préstamo no debe basarse únicamente en una disminución en el valor colateral, en ausencia de otros factores adversos. Las reestructuraciones de préstamo son a menudo en el mejor interés de la institución financiera y el prestatario. Además, la nueva política establece que los examinadores deben brindarle una deferencia razonable a los supuestos de valorización de colateral cuando son realizados por un tasador calificado o por la institución bancaria. La presente práctica por el FDIC se antepone a los principios de esta nueva política.

En atención a todo lo anterior, el Senado de Puerto Rico concluye que la aplicación por el FDIC de estándares de valoración de activos riguroso será un rudo golpe a la participación de las minorías en la banca nacional y reducirá sustancialmente el acceso a la población minoritaria a

fuentes crediticias y financieras. Por lo cual, urgimos a la FDIC a ser medurado en sus prácticas contra los bancos de etnia minoritaria establecidos en Puerto Rico; establecer medidas efectivas que faciliten la concesión de crédito y asistir a los bancos locales en su recuperación económica y capitalización.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RI CO:

1 Sección 1.- Urgir a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos Bancarios (“Federal
2 Deposit Insurance Corporation”, conocida por sus siglas en inglés como “FDIC”), ser
3 medurado en sus prácticas de valorización de activos contra los bancos de etnia minoritaria
4 establecidos en Puerto Rico; establecer medidas efectivas que faciliten la concesión de
5 crédito; y asistir a los bancos locales en su recuperación económica y capitalización.

6 Sección 2.- Esta Resolución será notificada oficialmente, en ambos idiomas oficiales, a la
7 Presidenta de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos Bancarios, Honorable Sheila C.
8 Bair, Federal Deposit Insurance Corporation, 550 17th Street, NW, Washington, DC 20429.

9 Sección 3.- Se ordena además, a la Secretarí a del Senado de Puerto Rico que remita copia
10 de esta Resolución, en ambos idiomas oficiales, al Honorable Barack H. Obama, Presidente de
11 los Estados Unidos; al Honorable Joseph R. Biden, Vicepresidente de los Estados Unidos; así
12 como al congresista Barney Frank y demás miembros del Congreso de los Estados Unidos.

13 Sección 4.- Esta Resolución será dada a la publicidad haciendo copias de la misma
14 disponibles a los medios de comunicación estatales y nacionales.

15 Sección 5.- Esta Resolución entrará en vigor inmediateamente después de su aprobación
16 por el Senado de Puerto Rico.